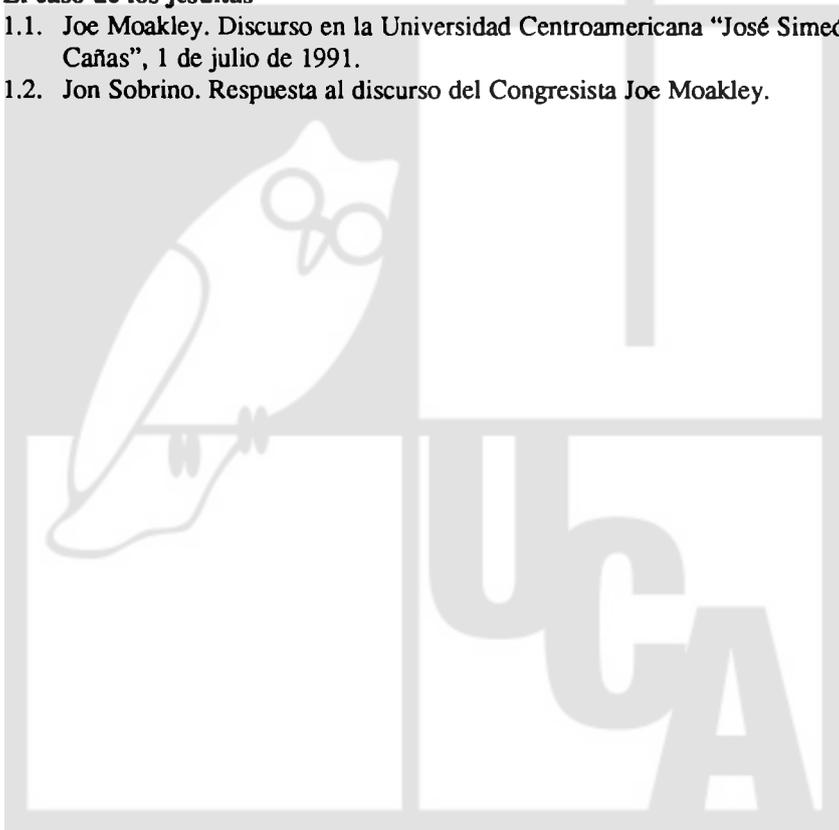


DOCUMENTACION

1. El caso de los jesuitas

- 1.1. Joe Moakley. Discurso en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", 1 de julio de 1991.
- 1.2. Jon Sobrino. Respuesta al discurso del Congresista Joe Moakley.



1. El caso de los jesuitas

1.1. Joe Moakley. Discurso en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", 1 de julio de 1991.

1. Introducción

Es para mí un honor estar con ustedes en esta histórica universidad y agradezco la amable invitación para dirigirme a ustedes esta tarde.

En particular, agradezco al padre Estrada por su presentación llena de tantos elogios. El representa lo mejor de la tradición jesuítica y ha dirigido esta gran universidad de una manera sobresaliente durante estos tiempos tan difíciles.

También quiero dar las gracias al padre Michael Czerny y a mi querido amigo, el padre Charlie Beirne, por su trabajo para hacer posible mi presencia esta tarde, en esta universidad. Asimismo, estoy encantado por poder hablar junto con el padre Jon Sobrino, quien siempre ha sido un defensor firme de la justicia social.

Y también quiero dar las gracias al padre Rodolfo Cardenal, quien valientemente ha aceptado traducir mis palabras al español. ¡Espero que su español tenga el acento de Boston!

Para comenzar, quisiera decirles que no soy una de esas personas que van por el mundo diciéndole a los demás cómo deben gobernar sus países. Nunca ha sido mi propósito cambiar el mundo; seré feliz si puedo hacer que las cosas sean un poco mejor para la gente que represento allá en Massachusetts.

El Salvador es mi primer gran esfuerzo en el área de las relaciones internacionales, y a juzgar por los comentarios que han aparecido en los periódicos salvadoreños más conservadores, hay algunas personas que esperan que este sea mi último esfuerzo.

Como ustedes probablemente saben, soy el presidente de una comisión especial, nombrada por el presi-

dente de Cámara de Representantes de Estados Unidos, para dar seguimiento a la investigación de los terribles asesinatos que tuvieron lugar en este campus, el 16 de noviembre de 1989. Los miembros de esta comisión no hemos intentado investigar el caso personalmente, pero sí hemos tratado de seguir el progreso de la investigación, conducida por las autoridades de este país.

El año pasado, nuestra comisión preparó un informe completo y una serie de informes más breves, en los cuales se discute la investigación. Estos esfuerzos no hubieran sido posibles sin la ayuda de salvadoreños con visiones muy distintas de la vida y sin la ayuda de algunos funcionarios de la embajada estadounidense, especialmente, del embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Walker, quien creo que es un buen hombre, que quiere que en este caso se haga justicia.

Al estar aquí hablándoles soy consciente de que las relaciones entre el pueblo de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos no siempre han sido fluidas y serenas en el pasado.

Un ex dirigente político salvadoreño dijo una vez que, durante este siglo, El Salvador ha soportado "cincuenta años de mentiras, cincuenta años de injusticias, (y) cincuenta años de frustración". La historia de El Salvador, dijo él, es la historia "de un pueblo que está muriéndose de hambre, que está viviendo en la miseria. Durante cincuenta años, la misma gente ha tenido todo el poder, todo el dinero, todos los empleos, todas las oportunidades".

Y tengo que decir con tristeza que, a lo largo de esos cincuenta años, todo lo que el pueblo de El Salvador oyó de Estados Unidos fue silencio.

No fue sino hasta hace diez años, después de la re-

DOCUMENTACION

volución nicaragüense, que el gobierno de Estados Unidos empezó a prestar seria atención a El Salvador. Incluso el gobierno del presidente Reagan comprendió que El Salvador, con su historia de desigualdad social, su ejército corrupto y brutal y con su izquierda activa y militante, era el candidato lógico para una revolución como nunca antes se había visto en este hemisferio.

Por eso, en los diez últimos años, Estados Unidos ha proporcionado a El Salvador más de cuatro mil millones de dólares en ayuda económica y militar. En el Congreso de Estados Unidos, algunos apoyan totalmente esta ayuda. Otros, yo mismo incluido, hemos expresado nuestra preocupación acerca de la prudencia de proporcionar grandes cantidades de ayuda al ejército salvadoreño.

2. La importancia del caso de los jesuitas

Esas preocupaciones fueron confirmadas en la mañana del 16 de noviembre de 1989.

Obviamente, los horribles asesinatos cometidos en este campus no fueron los primeros en El Salvador, ni, trágicamente, serían los últimos. Decenas de miles han muerto como resultado de la violencia política durante la década pasada. Ante los ojos de Dios no importa, y ante los nuestros tampoco debería importar, si la víctima de esa violencia es famosa o desconocida, rica o pobre, partidaria de la izquierda o de la derecha o de ninguna de las dos partes.

Cada uno de nosotros tiene pleno derecho a gozar de sus propios derechos; y cada uno de nosotros tiene derecho a que se haga justicia cuando esos derechos son violados.

Por lo tanto, no es debido a conceptos humanos o morales abstractos, que muchos de nosotros hemos llegado a dar tanta importancia al descubrimiento de la verdad sobre los asesinatos que tuvieron lugar en la UCA.

Al contrario, nos mueve la amistad que muchos de nosotros tuvimos con uno u otro de los sacerdotes asesinados; nos mueve el respeto que sentimos por el coraje de estos hombres en su búsqueda de la justicia social y de la paz; nos mueve la inocencia y el sufrimiento de Julia Elba Ramos y de su hija Celina; y nos mueve la brutalidad y la cobardía de los asesinatos mismos —perpetrados por docenas de soldados bien armados y entrenados, no en el calor de una batalla, sino a sangre fría y en la oscuridad de la noche.

Estos asesinatos nos mueven y estamos decididos a que, a diferencia de los casos del arzobispo Romero, del

padre Rutilio Grande y de tantos otros, al menos este crimen único contra Dios y la humanidad no quedará impune.

En este caso, exigimos la verdad. En este caso, insistimos que el sistema judicial cumpla con sus funciones. En este caso, exigimos que el gobierno y la Fuerza Armada de El Salvador demuestren sus protestas de respetar la democracia y la ley.

En este país, la oposición y los críticos del gobierno han sido detenidos, interrogados, torturados y asesinados durante años. Ahora, en el curso de las conversaciones para la paz, les están pidiendo que confíen en el gobierno, que confíen en la Fuerza Armada, que confíen en el sistema político. Por lo tanto, no debería ser demasiado esperar que el gobierno, esa Fuerza Armada y ese sistema judicial sean dignos de esa confianza en este caso único.

Pues si El Salvador, con toda la presión internacional, no puede presentar ante la justicia a quienes asesinaron a los jesuitas, ¿cómo puede esperarse que haya justicia la próxima vez que un dirigente sindical o un maestro o un campesino sea asesinado? ¿Cómo podemos esperar el final de la violencia de la izquierda sin poner fin a la impunidad de la derecha para ser acusada formalmente?

Por esto es por lo que es tan importante encontrar la verdad en el caso de los jesuitas; no porque ello guste a Estados Unidos, a Inglaterra, a España o a cualquier otro país, sino porque encontrar la verdad es esencial para que El Salvador viva en paz consigo mismo.

3. El estado del caso

Como ustedes saben, ocho miembros de la Fuerza Armada, incluyendo a un coronel, han sido acusados por los asesinatos. Otros dos han sido acusados por destruir evidencia. Otros cuatro están acusados por perjurio.

Creo que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Mauricio Gutiérrez Castro, y el juez Ricardo Zamora merecen mucho crédito por llevar el caso hasta este punto. El juez ha puesto lo mejor de sí mismo para construir un caso sólido contra los acusados. Y ha hecho todo lo que ha podido para investigar la posible incriminación de otros al ordenar o participar en los crímenes.

El papel del ejército es otra cosa.

El general Ponce ha dicho repetidas veces que estos asesinatos deben ser considerados como actos cometi-

dos por individuos y que la Fuerza Armada no tiene responsabilidad institucional en ellos. El general Ponce está completamente equivocado.

Consideren lo siguiente:

las estaciones de radio, controladas por el ejército en ese momento, transmiten amenazas contra los jesuitas, justamente antes de que los asesinaran;

había más de doscientos soldados en el lugar del crimen o cerca de él;

los asesinatos fueron llevados a cabo por una unidad del ejército con experiencia y bien entrenada, la cual actuaba siguiendo órdenes;

en el lugar del crimen se hicieron esfuerzos para encubrir los asesinatos y para acusar al FMLN de ellos;

en el registro oficial de las operaciones militares se anotó un enfrentamiento falso;

ni un sólo oficial se ha presentado voluntariamente con información sobre el caso;

evidencia controlada por el ejército ha sido retenida o destruida;

muchos de los oficiales llamados a testificar mintieron y volvieron a mentir sobre lo que saben;

incluso la Comisión de honor, nombrada por el presidente Cristiani para revisar el caso, mintió.

General, créame, usted tiene un problema institucional.

Y eso no es lo peor de todo. Estoy convencido de que, por lo menos, el alto mando de la Fuerza Armada supo pronto, después de los asesinatos, qué unidad era responsable de los crímenes. Por lo menos, trataron de limitar el alcance de la investigación para proteger a ciertos oficiales de la justicia. Y sigo creyendo que es muy posible que los asesinatos hayan sido ordenados por oficiales militares aún no acusados.

Estoy convencido de que existen oficiales de la Fuerza Armada que no participaron personalmente en los crímenes, pero que sí tienen más información acerca de ellos. Hasta ahora, estos oficiales no se han presentado a declarar, porque temen ser asesinados. Saben que, en El Salvador, decir la verdad sobre el ejército es considerado por algunos como un crimen castigado con la pena de muerte. De nuevo, repito al general Ponce, usted tiene un problema institucional.

En mi opinión, la institución de la Fuerza Armada es responsable, no sólo de los asesinatos, sino también del fracaso de la investigación, al no descubrir, hasta la fecha, toda la verdad.

Y, en mi opinión, usted tiene un problema institucional cuando es la misma institución la que infunde miedo en los testigos potenciales; cuando es la institución la que enseña a sus oficiales a permanecer en silencio, a olvidar, a evadir, a mentir, cuando es la institución la que, por encima de la lealtad debida a la verdad, al honor y al país, exige la lealtad a la misma Fuerza Armada.

El hecho es que, en este caso, ningún soldado u oficial puede hacer algo más patriótico o mejor para la Fuerza Armada o para El Salvador que presentarse con la verdad. Y si esto sucede, será nuestra responsabilidad, y la del gobierno civil, proteger al testigo y garantizar que la evidencia que proporcione sea utilizada y no encubierta.

Aún creo que es posible que un nuevo testigo o nuevos testigos se presenten. Creo en esto porque conozco que hay mucha gente buena en la Fuerza Armada de El Salvador, algunos fueron educados en esta misma universidad o en otros centros jesuíticos.

Creo que en la Fuerza Armada hay muchos que quieren ver que toda la verdad salga a la luz. Creo que hay muchos que quieren reformar a la Fuerza Armada y ver que toma su lugar apropiado en nuestra sociedad.

Muchas veces me han preguntado qué estaría dispuesto a aceptar para sentirme satisfecho en el caso de los jesuitas. ¿Me sentiría satisfecho con la convicción de los cinco soldados? ¿Debe ser castigado el coronel? ¿Son suficientes ocho condenas?

Mi respuesta es simple. Quiero la verdad. Al igual que el embajador Walker, quiero la verdad, porque creo que el pueblo salvadoreño se merece la verdad. Toda la verdad.

La justicia a medias no existe. O tenemos justicia o no la tenemos. La democracia a medias no existe. O ustedes tienen democracia, en la cual todos —incluidos los poderosos— están sujetos a la ley, o no hay democracia.

Por eso es por lo que creo que es tan importante que toda la verdad emerja en este caso. La verdad no es el enemigo.

Sin la verdad, la Fuerza Armada nunca se verá ab-

suelta de su responsabilidad en este crimen ni por haber protegido a quienes están comprometidos en él. Sin la verdad, este gobierno no puede reclamar tener instituciones verdaderamente democráticas. Sin la verdad, el argumento que afirma que la oposición al gobierno debería abandonar sus armas carece de fundamento. Sin la verdad, el camino hacia la paz en El Salvador se hará cuesta arriba.

4. La paz

Y no tengo que decirles cuán importante es poner fin a la guerra civil en El Salvador.

Poco antes de su muerte, el padre Ellacuría dijo que "el camino de la guerra ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar; ahora, debemos buscar el camino de la paz".

El padre Ellacuría habría sido también el primero en decir que el camino de la paz no es fácil y que tiene sus riesgos.

Pero el camino de la guerra está matando a El Salvador. Es una guerra sin triunfadores, sólo víctimas. Setenta y cinco mil muertos. Miles de desaparecidos. Un millón forzado a abandonar su patria. Una generación de niños a la cual se le ha negado la inocencia y la risa de la niñez. Miles de hombres y mujeres jóvenes que han perdido un brazo o una pierna, debido a los explosivos o a las balas.

Incluso los poderosos, los generales y los comandantes de ambos lados, son víctimas. Puesto que los responsables de esta guerra deben cargar en su alma con la responsabilidad de las muertes que ellos han causado, de la destrucción que han producido y de las injusticias que han generado a lo largo de esta década de guerra.

Durante diez años, hemos oído lo que los líderes de ambos lados adversan. Hemos oído las palabras del odio, las exigencias de venganza, las predicciones de triunfo. Pero nunca ha sido importante lo que cada parte rechaza; lo único importante, en realidad, es aquello por lo que cada parte está a favor.

Ahora, durante las negociaciones, ambas partes, el gobierno y el FMLN, tienen la tarea de definir qué cosas quieren. Ambas partes merecen crédito por los progresos que se han hecho; ambas merecen ser condenadas por la continuidad de la violencia sin sentido.

Me da mucha tristeza, después de todo este tiempo, oír que más gente joven está siendo desfigurada, mutilada o asesinada. Me enferma oír que esta violencia se

justifica como una táctica para negociar. Y me hace desear incluso más, que el padre Ellacuría estuviera aquí todavía para compartir con nosotros su sabiduría y su compasión.

No me corresponde a mí, ni a nadie de mi país, definir los términos apropiados para la paz en El Salvador. Esta es una responsabilidad sólo de los salvadoreños, con la ayuda necesaria de las Naciones Unidas.

Pero en el Congreso, nosotros tenemos la responsabilidad de ver que Estados Unidos sea una fuerza a favor de la paz, no de la guerra, en El Salvador.

Es nuestra tarea ayudar a aquellos que, en ambos lados, comparten la visión de un El Salvador democrático y justo.

Por lo tanto, al FMLN le digo que si quiere contar con nuestra comprensión, que negocie de buena fe, que termine su campaña de sabotaje, no más asesinatos, y que presente a la justicia a aquellos que asesinaron a los dos estadounidenses muertos después de la caída del helicóptero, en enero pasado.

Y a la Fuerza Armada le digo que, si quiere nuestra ayuda, debe hacer la parte que le corresponde para finalizar la violencia, debe respetar los derechos de aquellos con quienes no está de acuerdo, debe negociar en buena fe, y presentar ante la justicia no sólo a algunos, sino a todos los que ordenaron y participaron en los asesinatos en este campus hace diecinueve meses.

5. Conclusiones

Desde hace diez años he estado siguiendo los acontecimientos de El Salvador. En innumerables ocasiones me han dicho que no espere mucho de El Salvador. Los funcionarios de mi propio gobierno me han dicho repetidas veces que la violencia es simplemente parte de la cultura. Los asesinatos y la corrupción, me han dicho, siempre han sido comunes en El Salvador.

Nadie ama más a mi país que yo, pero pienso que es pura arrogancia que alguien de una nación con un presupuesto de defensa de 300 mil millones de dólares, con 25 mil millones de dólares en venta de armas, con un enorme programa de ayuda militar y con la tasa de homicidio más elevada del mundo occidental, critique a otra sociedad por su tendencia hacia la violencia. No estoy diciendo que los salvadoreños son mejores que todos los demás, sino que nunca he visto un pueblo que anhele y merezca tanto la paz como el pueblo de El Salvador.

No hay que caminar mucho en este bello campus

para ver todo un vecindario urbano construido con lata y cartón, hacinado en barrancos donde nada crece, excepto el hambre de los niños.

No hay que ir muy lejos para encontrar que los métodos para dar a luz y practicar cirugía apenas han cambiado en el último siglo.

No hay que ir muy lejos para encontrar campesinos luchando para hacer crecer alimentos para sus familias con sus manos, pues no tienen ningún equipo ni ningún crédito, excepto el de sus bolsillos vacíos.

No hay que ir muy lejos en El Salvador para comprender por qué es tan importante que termine la destrucción y comience la reconstrucción.

No hay que ir muy lejos para entender por qué las vidas del padre Ellacuría y de su comunidad, mucho más que sus muertes, eran tan importantes.

Los padres jesuitas nos enseñaron que la paz es me-

yor que la guerra, por la simple razón de que la vida es mejor que la muerte.

Ellos nos enseñaron a valorar la dignidad y el respeto a los derechos de cada ser humano, por humilde que éste sea.

Ellos nos enseñaron, aunque con frecuencia ha sido considerado un crimen en este país, que nunca es un crimen hablar por los pobres, por los indefensos o por los enfermos; nunca es un crimen decir la verdad; nunca es un crimen exigir justicia; nunca es un crimen enseñar al pueblo sus derechos; nunca es un crimen luchar por la paz justa. Nunca es un crimen. Siempre es un deber.

Así, pues, para concluir, roguemos a Dios para que nos dé fuerza, con el recuerdo de estos héroes mártires siempre presente en nuestras mentes, para cumplir con este deber todos y cada uno de los días de nuestras vidas.

1.2. Jon Sobrino. Respuesta al discurso del Congresista Joe Moakley.

Quisiera comenzar esta breve intervención agradeciendo al Congresista Joe Moakley su cariñoso recuerdo de mis hermanos jesuitas y de Julia Elba y Celina, y sus palabras finales sobre el pueblo pobre salvadoreño. Es verdad, Congresista Moakley, que éste es un pueblo noble y a la vez injustamente sufriente, "pueblo mártir y pueblo crucificado", como decía Ignacio Ellacuría.

Quiero agradecerle específicamente la verdad que ha dicho sobre el país y su Fuerza Armada y el compromiso que usted ha mostrado por seguir trabajando en el Congreso para parar la ayuda militar y conseguir nuevas relaciones, humanas y dignas, entre el gobierno de Estados Unidos y el pueblo de El Salvador. Sinceramente, no recuerdo haber escuchado en este país, en boca de ningún político norteamericano, verdades como las que usted ha dicho.

Y si se me permite una palabra personal, quiero agradecerle también que en las paredes de su oficina haya usted colgado un cuadro de monseñor Romero, y que lo hayan acusado en el Congreso norteamericano —como si eso fuera un delito— de ser partidario de la teología de la liberación. Pero, señor Moakley, no tema: la teología de la liberación sólo pretende poner verdad, justicia, esperanza y vida allí donde hay mentira,

injusticia, miedo y muerte.

A continuación quisiera hacer dos breves reflexiones, bien conocidas por todos, defendidas por la UCA, los jesuitas y la Iglesia, pero que siguen siendo muy necesarias.

La primera es recalcar lo que está en juego en el esclarecimiento del caso de los jesuitas. Ante todo la posibilidad de verdad como bien social sobre el cual se pueda basar la vida justa de los salvadoreños y —en éstos momentos—, también la negociación y la reconciliación. Como usted lo ha dicho, señor Moakley: ¿cómo va tener credibilidad en la mesa de negociación un gobierno que ni siquiera puede o quiere esclarecer este caso?

Lo que me parece importante recalcar, sin embargo, es que la verdad que aquí está en juego no es sólo la verdad que supera la ignorancia, sino la verdad que desenmascara la mentira. Mantener vivo y esclarecer el caso de los jesuitas significa entonces:

(a) Recordar —contra los planificados intentos de hacernos olvidarlo— que en el país ha habido 75,000 asesinatos, masacres como las de El Mozote, Sumpul..., etc. Muchos asesinatos como el de monseñor Romero y

el de los sindicalistas de FENASTRAS.

(b) Recalcar que estos asesinatos no caen del cielo, sino que tienen agentes históricos, y que la gran mayoría de ellos —según muchas instituciones de derechos humanos, nacionales e internacionales— pertenecen a la parte gubernamental (Fuerza Armada, cuerpos de seguridad) y a los derechistas escuadrones de la muerte.

(c) Recalcar que estos asesinatos han sido cometidos con total impunidad antes, durante y después de los hechos, que la administración de justicia —sin que la ayuda norteamericana, por cierto, haya ayudado mucho en ello— no ha funcionado prácticamente, y que quienes desean ayudar a esclarecer los crímenes —recuérdese el lamentable caso de la testigo Lucía Cerna— son tratados como sospechosos criminales.

(d) Y recalcar, sobre todo, que estos asesinatos no son producto de locuras momentáneas, sino productos necesarios de estructuras socio-económicas injustas, verdaderos ídolos —como las llamaba monseñor Romero— que necesitan víctimas para subsistir, aunque a estos ídolos los encubramos en el mundo occidental con términos tales como propiedad privada, seguridad nacional, intereses estratégicos.

Por todo ello, es muy importante y necesario el esclarecimiento de la verdad del caso de los jesuitas. Si ni siquiera en este caso se puede desenmascarar la mentira, el nuevo orden de paz tendrá pésimo fundamento, mientras que si en este caso se averigua la verdad se estará conociendo también cuál es una de las mayores raíces de la opresión y represión.

Esta cruel guerra tiene dos causas fundamentales: "la injusticia institucionalizada y la represión de Estado", como repetía Ignacio Ellacuría, en sus palabras sencillas, la violación del séptimo y del quinto mandamiento de la ley de Dios". Y para ocultarlo se ha apelado siempre y se sigue apelando a la "mentira institucionalizada", como decía el P. Ignacio Martín-Baró, la violación planificada y masiva del octavo mandamiento.

La consecuencia —y la petición— es la necesidad de seguir presionando hasta encontrar toda la verdad del caso, encontrar a los responsables intelectuales, aunque quizás otros, en la embajada norteamericana o en el Departamento de Estado, deseen contentarse con menos. El gobierno salvadoreño, la Fuerza Armada y la embajada norteamericana están impacientes por terminar con el caso de una vez por todas, pero hay que recordar que mucho más impacientes están otros —la mayoría del país— para que al fin se conozca y se acepte la verdad.

La segunda reflexión es sobre las relaciones del gobierno de Estados Unidos y el pueblo salvadoreño. Estas relaciones no siempre han sido fáciles, como así lo ha reconocido usted. La simple verdad es que los gobiernos de Estados Unidos no han tenido ningún interés por el pueblo salvadoreño en cuanto pueblo, y la pobreza secular no ha tocado su corazón de piedra. A los cincuenta años de mentiras, injusticia, miedo y frustración aquí en El Salvador, los sucesivos gobiernos norteamericanos fueron ajenos; pero no respondieron simplemente con el silencio, sino con una inactividad culpable, tolerando y bendiciendo todo lo contrario a la democracia que nos predicaban, fraudes electorales, opresión y represión.

En los últimos años, lo que más masiva e inequívocamente ha recibido este país de los gobiernos norteamericanos son armas para la destrucción y la muerte. Y ahora, en el caso de los jesuitas, encuentran dificultades y falta de cooperación en la embajada norteamericana, en el Departamento de Estado, el *FBI*, etc. Y ése no es el camino.

No lo es para nosotros, salvadoreños, pues la tristemente llamada ayuda militar —la palabra "ayuda" debería reservarse para fines más elevados— sólo ha acrecentado la muerte, el miedo en la población, la prepotencia entre los militares y la impunidad, pues incluso cuando hay cortes parciales en la ayuda o amenazas de ellos, los militares saben que no los van a dejar solos.

Ya lo denunció monseñor Romero en 1979, refiriéndose al gobierno norteamericano: "estamos hartos de armas y balas... El hambre que tenemos es de justicia, de alimento, medicinas, educación y programas efectivos de desarrollo equitativo. Si se llegan a respetar los derechos humanos lo que menos necesitaremos serán armas para la guerra".

Si las palabras de monseñor Romero suenan utópico-proféticas no por ello se las debe descualificar, sino que más bien muestran cuán necesaria es la profecía y la utopía. Es por ello urgente que el gobierno de Estados Unidos sustituya la ayuda militar por otra —una ayuda "más inteligente, más humana y más barata", como decía Ignacio Ellacuría. Y es urgente también que el gobierno norteamericano dé signos de que en verdad quiere que impere la justicia aquí en El Salvador. Si así lo quiere y sus palabras no son mera retórica, puede mostrarlo: (a) investigando el conocimiento que varios ciudadanos norteamericanos tienen sobre el caso de los jesuitas (antes y después de cometido el crimen); (b) facilitando la investigación con la presentación de documentación sobre el caso; (c) tomando en serio las

declaraciones que diez ciudadanos norteamericanos rendirán sobre el caso en Estados Unidos a petición del juez Zamora, y (d) explicando con claridad lo ocurrido con el mayor Buckland y la testigo Lucía Cerna y deduciendo responsabilidades de todo aquello en que no se procedió correctamente en ambos casos. Esta es, pensamos, la última oportunidad del gobierno norteamericano de mostrar interés real en el caso de los jesuitas.

Si ha de haber un nuevo comienzo aquí en El Salvador tiene que haber también un nuevo comienzo en Estados Unidos y en sus relaciones con nosotros. Si un fracaso en el esclarecimiento del caso dañaría gravemente al gobierno salvadoreño, también la indiferencia ante el caso y la concesión de ayuda para la guerra dañaría aún más la credibilidad del gobierno norteamericano.

A estas reflexiones tan conocidas sólo quisiera agregar, brevemente, para terminar que si, por todo lo di-

cho, es importante esclarecer los asesinatos, tan importante o más es recordar y poner a producir lo que fueron, hicieron y dijeron los mártires de la UCA, los sencillos salvadoreños como Julia Elba y Celina, los sindicalistas de FENASTRAS y tantos campesinos asesinados, el P. Rutilio Grande, las cuatro religiosas norteamericanas y monseñor Romero. El pueblo salvadoreño, pero también y especialmente el pueblo norteamericano necesitan de la luz, la esperanza, el compromiso y el amor que ellos generaron en vida y siguen generando en muerte.

Querido señor Moakley, quiero terminar agradeciéndole una vez más y muy sinceramente todo lo que usted está haciendo por este pueblo salvadoreño y animarle a que siga defendiendo a este pueblo allá en su país. Para ello, como usted también lo ha hecho, imploro la fuerza de Dios, de ese Dios que escucha el clamor de los oprimidos, y cuya gloria, como dijo monseñor Romero, es "que los pobres tengan vida".

